



Expte. n° QTS 15860/2019-4
"MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA
DE CÁMARA NORTE DE LA CABA s/
QUEJA POR RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD
DENEGADO en INCIDENTE DE
RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS
"FEDERICO S.A. Y OTROS SOBRE 1 -
EVASION TRIBUTARIA SIMPLE"

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta:

1. El Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Unidad Fiscal Norte interpuso queja contra el pronunciamiento de la Sala I que declaró inadmisibles el recurso de inconstitucionalidad. Allí cuestionaba la decisión de esa misma Sala que revocó el rechazo de la excepción de falta de acción formulada por la defensa, le hizo lugar y, en consecuencia, sobreseyó a los imputados por el delito de evasión simple.

Para resolver de este modo, los jueces de Cámara consideraron que correspondía la aplicación retroactiva de la ley n° 27.430 y, por lo tanto, el monto evadido por los imputados no superaba el umbral mínimo fijado por la nueva ley.

2. En su recurso de inconstitucionalidad, la fiscalía argumentó que la interpretación efectuada por la Cámara, según la cual correspondía aplicar al caso la ley n° 27.430 como ley penal más benigna, era *contra legem*, ya que esa norma, "lejos de desincriminar la conducta, se limitó a ajustar el umbral económico de punibilidad a la realidad económica actual". En ese sentido, explicó que la modificación no implicaba un cambio de valoración de la conducta, sino solamente una pretensión de "corregir los efectos de la depreciación de la moneda y el proceso inflacionario desde la sanción de la ley [n°] 24.769".

3. Para denegar el recurso de inconstitucionalidad, la Sala interviniente consideró que el recurrente no consiguió plantear una cuestión constitucional.

4. El Sr. Secretario Judicial requirió al presentante que acompañara, en el plazo de cinco días, copias de determinadas piezas procesales, que allí especificó, a fin de dotar de autosuficiencia a su recurso.

Cumplido el plazo conferido sin que el recurrente efectuara presentación alguna, se procedió a darle intervención al Fiscal General.

5. El Fiscal General Adjunto, al tomar intervención, argumentó que llevaba la razón el recurrente y que la aplicación de la ley penal más benigna

resultaba infundada y vulneraba el principio de legalidad, de razonabilidad de los actos de gobierno y del debido proceso legal. Al respecto, sostuvo que las modificaciones introducidas por las leyes n° 26.735 y n° 27.430 no respondieron a un cambio de valoración social respecto de la reprobación del hecho, sino exclusivamente a la necesidad de actualizar los montos de las condiciones objetivas de punibilidad a fin de adecuarlos a la realidad económica y compensar la devaluación de la moneda en la que estaban expresadas.

Por ello, consideró que correspondía hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad, dejar sin efecto la resolución recurrida y devolver las actuaciones para su continuación.

Fundamentos

Los jueces Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg dijeron:

1. La queja fue interpuesta en tiempo, pero presenta problemas de autosuficiencia, ya que la fiscalía no acompañó la totalidad de las piezas procesales que le fueron requeridas —tales como el acta de la audiencia del 10 de marzo de 2020 y la constancia de presentación del recurso de inconstitucionalidad, de la que surgiera la fecha y hora de su presentación—, pese a haber sido debidamente intimada por el Sr. Secretario Judicial.

Tampoco mencionó justificación alguna en cuanto a los motivos que, eventualmente, le habrían impedido obtener o aportar lo oportunamente solicitado.

Este grave defecto formal provoca la imposibilidad de examinar si el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto en el término legal para hacerlo, lo cual impide tener por cumplido el requisito de autosuficiencia propio de la queja.

2. En las condiciones descriptas, la presentación directa que aquí se examina no puede prosperar, toda vez que no satisface los recaudos indispensables propios de una queja como la articulada (TSJ, *in re* “Club Atlético River Plate, Asoc. Civil s/ inf. art(s) 4.1.1.2, habilitación en infracción- L 451”, expte. n° 7936/11, resolución del 24/08/2011—y sus citas—, entre otros).

3. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto. Así lo votamos.

La jueza Marcela De Langhe dijo:

De acuerdo al criterio que expuse en mi voto en ["Ciamberlini, Nicolas Martin y otros s/ art. 131"](#), expte. n° 10149/2018-3, resuelto el 23/03/2022, al

que me remito por razones de brevedad, voto por rechazar el recurso de queja de la fiscalía.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. El MPF viene sosteniendo que el importe para que concurra la figura de evasión establecido por la ley nº 27.430, \$ 1.500.000, es una mera corrección (o actualización) monetaria; razón por la cual, concluye, no constituye una figura penal más benigna que la que preveía el art. 1 de la ley 24.769, cuya comisión fue imputada en estas actuaciones (cf. la pág. 9 de la queja).

En palabras del recurrente: “esta modificación[, se refiere a la introducida por la ley 27.430,] no implicó un cambio en la valoración, sino una mera actualización de las sumas punibles. Por ello, la nueva ley no eliminó el tipo penal en absoluto, sino que mantuvo la redacción anterior actualizando únicamente los montos de las condiciones objetivas de punibilidad” (cf. la pág. 9 de la queja).

La Cámara no compartió esa interpretación. Sostuvo que había variado el bien jurídico tutelado e hizo lugar a la excepción de atipicidad opuesta por la defensa. En palabras de la Cámara: “Las razones apuntadas permiten afirmar que resulta correcta la posición que afirma que el monto previsto por la norma en cuestión se trata de un elemento de tipo. Siendo ello así, es claro que un precepto que implique un cambio en los elementos del tipo objetivo del delito en cuestión —y, por consiguiente, también en los requisitos que debe cumplir el tipo subjetivo para estar completo— necesariamente debe aplicarse en términos de ley más benigna, conforme lo establecido por las normas nacionales e internacionales ya mencionadas, porque implica una desincriminación de una conducta que, con antelación, estaba alcanzada por el delito” (cf. la pág. 12 de la sentencia de la Cámara).

2. Ese debate no es ni constitucional ni federal. Su resolución pende de establecer cuál es la correcta interpretación del derecho común, en el caso, la figura de evasión prevista en la ley nº 27.430. A su turno, el MPF no muestra que la solución a la que arribó la Cámara sea insostenible. Tanto es así, que la CSJN, el 28 de octubre de 2021, arribó a la misma solución que lo hizo la Cámara en la sentencia recurrida (cf. la sentencia en autos “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros...”, publicada en *Fallos*: 344:3156). Allí la CSJN resolvió un debate análogo al que aquí traen las partes, pero respecto del IG y del IVA, período 2011. El MPF sostenía que las sumas establecidas para la figura de evasión por la ley nº 27.430 constituían una actualización de los valores a que se refería la ley nº 24.769; por su parte, la defensa sostenía que la figura de evasión sancionada por la ley nº 27.430 era más benigna que la sustituida por esa ley.

La CSJN le dio la razón a la defensa. Sostuvo que la postura del Ministerio Público “...constitu[ía] una afirmación dogmática, que no encuentra

sustento en elemento de juicio alguno, lo cual conduce también a la descalificación del auto apelado desde esta perspectiva. Y, al propio tiempo, a desestimar el agravio que, sobre esa base, las partes acusadoras públicas invocaron al impulsar la vía extraordinaria federal en los demás casos citados en el considerando 4º segundo párrafo” (cf. el cons. 17º). Dicho ello, entendió que no había razones para apartarse de la doctrina sentada *in re* “Palero” (sentencia publicada en *Fallos*: 330:4544).

Por ello, voto por rechazar la queja.

Por ello, y habiendo tomado la intervención que le compete el Fiscal General Adjunto,

**El Tribunal Superior de Justicia
resuelve:**

- 1. Rechazar** el recurso de queja interpuesto.
- 2. Mandar** que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

